
LA ESPAÑA SUBVENCIONADA DUPLICA SU PESO EN 2021

P.24 | C. URRUTIA / D. VIAÑA



LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

EL VIRUS DOBLA EL PESO DE LA ESPAÑA 'SUBVENCIONADA'

Las ayudas, subsidios y prestaciones cubrirán en febrero a más de seis millones de personas

Las solicitudes al Servicio Estatal de Empleo se multiplicaron por tres hasta el pasado mes de noviembre

La deuda pública acumuló un aumento de 123.000 millones en los 11 primeros meses de 2020

CÉSAR URRUTIA DANIEL VIAÑA MADRID
El coronavirus ha multiplicado el peso que soporta el Estado del bienestar para proteger a sus ciudadanos. Las ayudas, subvenciones, subsidios y prestaciones destinadas a cubrir a personas excluidas del mercado laboral alcanzarán ya en febrero al doble de beneficiarios que hace un año y se situarán en una cifra cercana a seis millones si se incluyen en el cómputo personas en desempleo, afectadas por

expedientes de regulación temporal, autónomos que se acogen al cese de actividad y beneficiarios reconocidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estos seis millones de personas suponen un 40% de los ocupados en el sector privado. En 10 meses, el escudo social desplegado por el Gobierno ha tenido que hacer frente a un aumento del paro registrado que en enero superará con toda seguridad la barrera de los cuatro millones de desempleados (al menos 800.000

más que en enero del año pasado); un volumen de 750.000 trabajadores inscritos en ERTE que es muy inferior al del pasado mes de mayo pero que también aumentará con la tercera ola; más de 350.000 trabajadores autónomos con cese de actividad reconocido y que pasarán a ser 700.000 con los esquemas de protección de rentas que entran en vigor el 1 de febrero; y 460.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, la iniciativa lanzada por Seguridad Social, que tiene como ob-

jetivo superar el retraso que acumula y llegar a un millón este año. **MÁS MADERA** No es solo eso. Las comunidades autónomas y ayuntamientos, por su parte han desplegado distintos planes de ayudas y subvenciones que se suman a los de la Administración central. La irrupción del coronavirus y sus consecuencias sobre la economía de los hogares y empresas han dado la vuelta a los presupuestos de las administraciones

que, deben afrontar una demanda creciente de ayuda financiera por parte de ciudadanos y empresas que no levantan cabeza. Hasta noviembre, el número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ascendió a 2.169.246, lo que supone el triple (un 217,8% más) que el mismo mes del año anterior. Las altas tratadas aumentaron un 196,8%. La figura jurídica de los ERTE se flexibilizó en marzo para amortiguar el golpe del confinamiento masivo de la población sobre el empleo, lo mismo que el cese de actividad de los trabajadores autónomos configurado en los últimos meses. El IMV, por su parte, fue lanzado de manera precipitada en verano con el objetivo de cubrir a hogares sin ningún tipo de ingresos. Tanto los ERTE como el IMV permanecerán cuando pase la pandemia. Con el vicepresidente Pablo Iglesias apremiando para pagar y José Luis Escrivá, responsable de Seguridad Social, tratando de diseñar un subsidio técnicamente impecable, el despliegue ha fracasado en alcance al no disponer el organiz-

OLGA GIMENO AUTÓNOMA

“PEDIMOS SÓLO QUE NOS DEJEN TRABAJAR”

Olga Gimeno emprendió hace cuatro años Smileland, una ludoteca para niños de cero a seis años pensada para ser percibida como mucho más que un parque de bolas.

Incluyó un servicio de cafetería para los padres y el negocio montado sobre un local alquilado en Valencia rápidamente cogió vuelo para contar con una plantilla de siete empleados. Los cumpleaños se celebraban cada día y hubo que montar una central de reservas que daba cita a cuatro meses vista.

Desde marzo del año pasado, el confinamiento, el miedo de los clientes, las restricciones de aforos y de horarios han acabado por cerrar el negocio. Fue la semana pasada. Tras superar la desinformación inicial de que los niños son supercon-

tagiadores del Covid y comprar una máquina de renovación de 50.000 litros de aire por hora, Gimeno trató de reabrir en verano. No hubo suficiente demanda y la segunda ola llegó con una vuelta de tuerca por parte de la Generalitat Valenciana.

«Nos quedaba la esperanza de la vuelta al cole, hicimos inversiones en las instalaciones para equipararlas a un espacio abierto mucho más seguro que un aula. Pero la Administración sembró el miedo: a los niños les quitan el ocio infantil pero les permiten ir a un centro comercial, a lo mejor deberíamos ponernos el cartel de discoteca para que nos hagan caso».

Tras acogerse a las ayudas por ERTE de fuerza mayor y salir en verano, Smileland dejó de renovar el ERTE en octubre. Al reducir jornada, a los empleados no les compensaba y se han ido al paro. «Van a cobrar más allí, desde el 13 de enero aquí no hay nadie», concluye Olga, que no entiende como la Administración autonómica no ha sido capaz aún de sentarse a escuchar a su sector. «No pedimos ayudas, pedimos que nos dejen trabajar».



ALBERTO SAIZ

V. CARPINTERO GESTOR

“DIJIMOS QUE NO PIDIERAN LOS ERTE”

La gestoría de Carpintero está ubicada en el paseo de Marqués Hermedia en Santander, una de las zonas más pobladas de la capital cántabra, y allí acudía caminando todos los días del confinamiento desde su domicilio en el Sardinero. Con los ocho empleados de la empresa teletrabajando desde el primer día, Carpintero de la noche a la mañana se convirtió en consultor laboral, tramitador de expedientes y de cotizaciones e impuestos y buscador de las vías más rápidas para acceder a ayudas locales, autonómicas y estatales para pymes y autónomos.

«A los del SEPE en su ventanilla virtual habría que hacerles un monumento pero el organismo ha fracasado: debe haber como 300.000 en toda España que

aún no han cobrado y los que han recibido el dinero tendrán que tributar 1.400 euros de media», explica.

El gestor recuerda que presentaban la documentación de sus clientes «en tiempo y forma» y no había respuesta, ni siquiera un recibo. Carpintero recomendó a quienes pudieran permitírselo que no se acogieran al ERTE. «Si la pandemia duraba poco y había una recuperación rápida estaba bien, pero si se prolongaba era una trampa porque las penalizaciones al despido bloquearían a la empresa, que seguiría consumiendo recursos, incluso patrimonio del empresario. Ha habido ya muchas bajas de pymes y autónomos pero lo peor está por llegar», comenta preocupado. «Si a pymes y autónomos les va mal, le irá mal a Cantabria».

La asistencia a la emergencia empresarial en primera fila ha incluido la contratación de créditos avalados por el ICO. «La gente firmaba todo lo que le pusieran y aunque los avales estaban ligados únicamente al préstamo, he visto bancos aprovecharse para colocar más productos: seguros de vida, de coche, pensiones...».



DAVID S. BUSTAMANTE

J. HORMIGOS SEPE

“NO SÉ CÓMO AGUANTA LA GENTE”

«Hemos quintuplicado los trámites, las oficinas están desbordadas y no sólo por los ERTE, también por otras prestaciones y subsidios extraordinarios. Una avalancha se soporta, pero vamos ya a cumplir un año. Esto está generando un gran estrés, porque por más que te esfuerzas, la montaña sigue estando ahí», explica Javier Hormigos, trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Cádiz.

Hormigos critica además que «los sistemas informáticos tienen unos 30 años de antigüedad», lo que no hace más que dificultar el proceso y que ya ha sido denunciado en numerosas ocasiones. Este trabajador del SEPE también denuncia que los 8.500 empleados que ahora mismo componen este servicio no son su-

ficientes, y que además 1.500 de ellos son interinos.

«El trabajo que desarrollamos es muy específico, no todo el mundo sabe reconocer las prestaciones, y estos trabajadores ya lo saben hacer. Perderlos y volver a los 7.000 trabajadores o tener que enseñar a nuevos empleados no hace más que empeorar las perspectivas que tenemos», explica.

Y esas perspectivas, más allá del trabajo de los propios funcionarios, son que los beneficiarios de las prestaciones sufren ya importantes retrasos en el reconocimiento de sus ayudas y que es casi imposible contactar telefónicamente con el SEPE. «No sabemos cómo la gente puede soportar los retrasos. En Cádiz, una persona que hoy quiera pedir cita en una oficina, tiene unos 15 días de retraso. Eso significa que un trabajador que haya terminado la campaña de Navidad en enero, por ejemplo, no cobrará su prestación hasta marzo. Es tan complicada la situación que las citas previas incluso se están vendiendo», lamenta.



E.M.

6 MILLONES DE PERSONAS YA RECIBEN ALGÚN TIPO DE AYUDA



mo de medios para ejecutar la orden del Consejo de Ministros ni para tramitar un volumen de peticiones superior al millón. Con cuantías de entre 462 euros y 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar, la cifra de beneficiarios que perciben esta prestación se quedó a final de año muy lejos de lo previsto, con un gasto de 580 millones de euros.

La experiencia de Escrivá con los ERTE ha sido vivida por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, con las prestaciones de los ERTE. Es, según repite Díaz, una nueva manera de responder a la crisis.

Sin medios humanos y técnicos, los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no han dado abasto con una demanda de ayudas que desde el primer momento hizo colapsar el sistema decretado desde el Consejo de Ministros. Tras alcanzar un pico de 3,4 millones de beneficiarios en abril, a día de hoy hay unas 750.000 personas en ERTE con unos costes que en 2020 han superado los 15.000 millones de euros y que, hasta mayo, pasará otra factura cercana a 7.000 millones. Ahora, el Gobierno quiere convertir esta he-

rramienta laboral extraordinaria en una alternativa estructural.

La gran cuestión que preocupa a los economistas es si el despliegue de esta red de ayudas servirá para evitar una quiebra masiva de empresas. Así es como hasta diciembre el Estado avaló préstamos por valor de 114.000 millones de euros, cuya carencia de pago vencerá el próximo mes de marzo, con ya tres olas de restricciones administrativas golpeando a las empresas. «Los empresarios que a día de hoy aguantan son héroes porque arriesgan incluso su patrimonio por ellos mismos y sus trabajadores», explica Susana Soneira, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de La Coruña.

Todo ello está ya presionando de manera muy notable a la deuda pública, que en noviembre del pasado año estaba en 1,31 billones de euros según los datos del Banco de España, y lo seguirá haciendo también en el presente ejercicio. Y eso es sin duda una gran debilidad para la economía española. La respuesta de todos los gobiernos ante la crisis derivada del coronavirus ha sido la de gastar más, y tanto Bruselas como el Fondo Monetario

3.888.137

PARO REGISTRADO. El Ministerio de Trabajo difundió esta cifra de desempleo en diciembre, un dato que probablemente escalará a 4 millones en enero.

16,26

TASA DE PARO. La tasa de paro registrada por la Encuesta de Población Activa (EPA) hace una media trimestral y no incluye los trabajadores en ERTE.

137.000 MILLONES

MEDIDAS DE APOYO. Es la factura de los avales, prestaciones y subsidios, pero no hay una cifra precisa del gasto total en paliar los daños económicos del Covid.

1,3 BILLONES

DEUDA. Hasta la llegada de la recuperación y los fondos europeos, el Estado está recurriendo a la deuda, que ya asciende al 120% del PIB.

Internacional (FMI) han avalado esa política. Pero el problema es que España llegó a una situación de debilidad, con un pasivo que ya rozaba el 100% del Producto Interior Bruto (PIB) después de que ninguno de los últimos Ejecutivos, ni el de Rajoy ni el de Sánchez, hiciera un esfuerzo real por contenerla en los años de bonanza.

De hecho, sólo en los diez últimos años, la deuda pública se ha disparado en más de 660.000 millones, siendo muy notable el repunte de 2012 –en plena crisis financiera– o el incremento de 123.000 millones que se acumulan en los 11 primeros meses de 2020.

Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido al Ejecutivo un plan creíble y tangible para reducir la deuda, ya que en caso de no hacerlo se podría estancar en el 120% del PIB en los próximos años, cuando la UE recomienda que esté sobre el 60%. Y eso sería una fuente de «vulnerabilidad» ante subidas de tipos y limitaría más la capacidad de reacción antes futuras crisis, así como una gran carga para las próximas generaciones.

RUBÉN GRACIA EMPRESARIO

“TENGO AIRE HASTA MAYO, NO MÁS”

Antes de la pandemia, Rubén Gracia planeaba abrir un hotel junto al asador La Vía Verde, que gestiona en el área de servicio de la salida 81 en la A-23, a la altura de Sarrión (Teruel). Llevaba cuatro años dentro de un contrato de alquiler de 20 repartiendo el negocio entre turistas y transportistas. Ahora ve las cosas de otro modo. «No sé cuánto tiempo aguantaré. Tengo aire hasta mayo».

Gracia se ha acogido a todas las ayudas disponibles y no ha bajado los brazos en ningún momento frente al Covid. Sus pérdidas de explotación son de 4.000 euros semanales. Ha avalado con el ICO una línea de crédito de 120.000 euros. La carencia vence en marzo y él ha dispuesto la mitad para adaptar el local y digitalizar el



ALBERTO SAIZ

negocio. También ha metido a parte de la plantilla en ERTE, el Gobierno de Aragón le ha dado a fondo perdido 3.700 euros y los dos primeros trimestres de 2020 la Administración Central le aplazó el pago de impuestos. «Pero el 20 de octubre tuve que pagar de golpe 40.000 euros así que, con semejante palo es difícil que podamos salir adelante».

Este empresario decidió el 14 de marzo quedarse al pie del cañón en su negocio. Así 80 días, extremando las medidas de higiene para atender a los camioneros, que entre Murcia y Ribafarraf (Navarra) no podían parar en otro sitio.

Gracia y la Vía Verde se hicieron populares como un ejemplo de perseverancia aragonesa. El 1 de julio sacó a su plantilla del ERTE y contrató a cuatro personas para la limpieza de los baños. Con la segunda ola, el 26 de octubre toda la plantilla volvió a un ERTE al 50%. A día de hoy, la Vía Verde cuenta con los mismos trabajadores que en 2017. «El ERTE me ayuda pero tengo acumulados 40.000 euros en bonificaciones y si tengo que pagar esa cantidad por despedir a uno, cierro».

M. EXPÓSITO TRABAJADORA

“EL SEPE ME PAGARÁ 440 EUROS MENOS”

María Luisa es la camarera de hotel más veterana de uno de los tres establecimientos que la cadena Riu tiene en la localidad malagueña de Torremolinos, un hotel todo incluido de temporada que vive de turistas alemanes y británicos y que cierra tres meses al año.

El 18 de marzo, cuando habitualmente el hotel se reactiva, la hibernación económica decretada por el Gobierno llevó a la empresa a solicitar un ERTE que se prolongó hasta junio. María Luisa regresó al trabajo, que en ese momento alimentaba el turismo nacional, para volver a ver su empleo suspendido en septiembre. «Saber que no te despiden es un alivio pero para mí el SEPE –organismo que abona la prestación por el 70% del salario– ha sido desastroso: co-



MARTÍN MESA

bré mi primera nómina en mayo y luego cobré de más porque el 11 de junio me reincorporé y me siguieron pagando, así que tengo que devolverles un cobro indebido de 19 días», explica.

Como tantos españoles afectados por los cierres parciales de empresas, ha tenido que ajustar su economía a la operativa imprevisible del organismo. Con una prestación de 990 euros sobre un contrato fijo discontinuo de 10 meses al año, Expósito ha aprendido el proceso de tramitación de los ERTE a base de insistencia y fracasos al teléfono, el correo electrónico o incluso acudiendo a oficinas. «Cobraré diciembre el próximo mes de febrero porque las empresas mandan la notificación a mes vencido y el SEPE paga el 10 del mes siguiente, pero aunque no me lo han avisado, espero menos de lo que me

corresponde porque me restarán 440 euros por los 19 días que trabajé en junio», cuenta. Da por perdida ya la Semana Santa y tiene esperanza en las vacaciones, que parece que van adelantadas en Reino Unido y Alemania, y en la temporada de verano.

ALICIA MIRALLES OPOSITORA

“TENDRÉ UNA NÓMINA HASTA QUE ME JUBILE”

Alicia Miralles se acercaba a los 50 años de edad y tenía claro que su carrera laboral había sido demasiado precaria como para aportar tranquilidad a ella y a su familia. El pasado mes de junio, en el único respiro que ha dado la pandemia en 2020, tomó posesión de la plaza de repartidora de Correos en Pedreguer (Alicante) a la que había opositado en enero. «Para mí 2020 ha sido espectacular, he ganado derecho a la certidumbre de una nómina hasta que me jubile», celebra.

Hija de padre español, nació en Argentina y llegó a Alicante a trabajar en los años 90. Primero limpió casas, pero el salario era escaso y en 2003 buscó trabajo en una fábrica de ropa infantil, cosiendo. «Trabajaba cuatro horas en nómina y



ALBERTO SAIZ

otras cuatro en negro; constantemente me despedían y me volvían a contratar porque yo creo que de alguna forma cobraban por sacarme del paro, que no me daba para nada porque apenas eran 300 euros», recuerda.

Desde los 36 años de edad hasta el pasado mes de junio, Miralles ha encadenado en Correos trabajos de sustitución en distintas localidades de Alicante. Al principio repartía en su propio coche. «En las bolsas de trabajo estás dando vueltas todo el tiempo, terminas un contrato y no sabes dónde vas».

En los próximos meses Correos pondría en el mercado laboral más de 3.200 empleos. Miralles lo había intentado antes pero falló por falta de tiempo. A la tercera, se apuntó a unos cursos online específicos en la academia Campus Training. Aprobó y además eligió plaza

en la localidad donde vive. «He pasado dos años de siete de la mañana a ocho y media de la noche sin parar, ni sábados ni domingos. Me ha costado unos 2.000 euros pero estaba invirtiendo en mi futuro. Aún no me lo puedo creer pero no es suerte, me lo he currado».